

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO DE SUSTANCIACIÓN:	744
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2017-00096-00
MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO SINGULAR
EJECUTANTE:	ROSA HELENA MORENO LÓPEZ
EJECUTADA:	LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
ASUNTO:	Niega solicitud requerimiento a Fiduprevisora

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Mediante memorial enviado por correo electrónico el 11 de agosto de 2022, el apoderado de la parte demandante informó que ha radicado varias peticiones ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Secretaría de Educación de Soacha y Secretaría de Educación de Cundinamarca, solicitando el cumplimiento de la providencia dictada por este juzgado el 25 de febrero de 2019, pero tales entidades se trasladan mutuamente la responsabilidad de acatarla, motivo por el cual deprecó que se requiera a la Fiduciaria La Previsora S.A. para que defina cuál de las dos secretarías de educación daría cumplimiento a la orden judicial (fls. 80 a 85, C. 1).

Para resolver tal pedimento, se recuerda que el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 establece que las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a los docentes, serán reconocidas por éste mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual deberá ser elaborado y firmado por el Secretario de Educación de la entidad territorial certificada a la que se encuentre vinculado el docente.

A su turno, los artículos 2 a 5 del Decreto 2831 de 2005 determinan el procedimiento que debe seguirse para efectuar el reconocimiento y pago de prestaciones sociales a cargo del referido fondo, de los cuales se puede concluir que el ente territorial actúa como un mero facilitador y el pago lo asume el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues si bien la secretaría de educación del ente territorial al cual está vinculado el docente elabora el proyecto de acto administrativo de reconocimiento y posteriormente lo suscribe, previa aprobación de la Fiduprevisora S.A., encargada de la administración de los recursos de dicho fondo, por mandato legal tal secretaría lo hace por delegación y en representación del Ministerio de Educación y en esa medida no obligan al ente territorial ni comprometen sus recursos para la cancelación de tales prestaciones sociales.

En el presente caso es pertinente indicar que en la sentencia que sirve de título ejecutivo, dictada el 30 de agosto de 2011 por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá en el proceso No. 2007-00559-00 (fls. 3 a 18); en el auto interlocutorio No. 1775 emitido por este juzgado el 11 de diciembre de 2017, que libró mandamiento ejecutivo (fls. 46 a 49); el auto interlocutorio No. 456 del 24 de mayo de 2018, que ordenó seguir adelante la ejecución (fl. 61); y el auto interlocutorio No. 095 del 25 de febrero de 2019, que fijó la liquidación del crédito en la suma de \$3'433.023,03 (fls. 68 y 69), se tuvo como entidad ejecutada únicamente a La Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de modo que la entidad territorial, sea cual fuere a la cual estuvo vinculada la docente favorecida con la sentencia objeto de ejecución, no está obligada a pagar tal condena judicial.

Obsérvese, que a folios 20 a 24 obra la Resolución No. 644 del 30 de abril de 2015 expedida por la Secretaria de Educación de Cundinamarca, mediante la cual dio cumplimiento a la sentencia proferida el 30 de agosto de 2011 por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá y re-liquidó la pensión de jubilación de la señora Rosa Helena Moreno López, de manera que sería esa entidad la que tendría la competencia para expedir el acto administrativo de acatamiento del auto del 25 de febrero de 2019, que fijó la liquidación del crédito en el presente proceso ejecutivo singular.

Por consiguiente, se niega la solicitud del apoderado de la parte ejecutante de requerir a la Fiduciaria La Previsora S.A. para que determine la secretaría de educación competente para cumplir la orden judicial dispuesta en dicho proveído.

En todo caso, teniendo en cuenta el estado actual del proceso, es claro que el recaudo de la suma de dinero adeudada puede hacerse efectivo con la materialización del embargo decretado sobre los dineros que posea la entidad ejecutada en los bancos Colombia y BBVA, respecto del cual la parte ejecutante debe estar atenta para que se dichas entidades financieras procedan a retener el monto cautelado y, en caso de que no acaten esa orden judicial, lo informe al juzgado para tomar las medidas a que haya lugar.

La presente providencia será notificada en estado de acuerdo a lo establecido en el artículo 180-1 y 201 del C.P.A.C.A.; estado que podrá ser consultado en el portal de internet de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

AHSC

Auto 1 de 2

Firmado Por:
Humberto Lopez Narvaez
Juez
Juzgado Administrativo
027
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8629159d3c07d5b38a95d51e71ff992fe8ce744a5e6513060b6d895527ede1c0**

Documento generado en 19/09/2022 08:23:05 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>